

Hordas de vigilantes

Publicado en Z, julio-agosto de 1998.

El artículo "[El arma decisiva](#)" fue a la imprenta pocas semanas antes de la fecha prevista, abril de 1998, para que firmaran el AMI los países de la OCDE. En aquel momento estaba bastante claro que no se alcanzaría el acuerdo, y así fue: un importante acontecimiento, que merece la pena tener muy en cuenta como lección de lo que puede lograrse mediante el «arma decisiva» que es la organización popular y el activismo, incluso en circunstancias sumamente poco propicias.

En parte, el fracaso fue consecuencia de disputas internas: por ejemplo, las objeciones europeas al sistema federal estadounidense y al ámbito extraterritorial de las leyes estadounidenses, la preocupación por mantener algún grado de autonomía cultural, etc. Pero surgió en el horizonte un problema mucho más significativo: la masiva oposición popular en todas partes del mundo. Iba poniéndose cada vez más difícil garantizar que las reglas del orden global podrían seguir siendo «escritas por los abogados y hombres de negocios que planean beneficiarse» y «por gobiernos que asesoran y orientan a estos [mismos] abogados y hombres de negocios», mientras que «lo que invariablemente se echa a faltar es la voz del pueblo», según la precisa descripción que hace el *Chicago Tribune* de las negociaciones sobre el AMI, así como de los trabajos en marcha para «redactar las reglas» de «la actividad global» en otros dominios y sin interferencias del público. En suma, se estaba volviendo más difícil restringir el conocimiento y la participación a los sectores que la administración Clinton, con una claridad no pretendida y ajena a sus costumbres, identificaba como sus «electorados nacionales». ' el U. S. Council for International Business, que «promueve todos los intereses norteamericanos tanto en el interior como en el extranjero», y las concentraciones de poder privado en general; pero no era difícil, lo que es crucial, con el Congreso (que no había sido informado, violando los requisitos constitucionales) ni con el público en general, acallado por «el velo secreto» que se había mantenido, con impresionante disciplina, durante tres años de intensas negociaciones.(1)

El problema había sido señalado por el *Economist* de Londres al irse acercando la fecha fijada. La información se filtraba gracias a los grupos interesados por las cuestiones públicas y las organizaciones de base, y se estaba poniendo más arduo ignorar a quienes «quieren que se consignen por escrito estrictas normas sobre cómo los inversores extranjeros tratarán a los trabajadores y protegerán el medio ambiente», temas que «apenas comparecieron» mientras las deliberaciones quedaban restringidas a los «electorados nacionales» de los estados democráticos.(2)

Como se esperaba, los países de la OCDE no llegaron a un acuerdo el 27 de abril de 1998 y pasamos a la fase siguiente. Una de las consecuencias más útiles fue que la prensa nacional se apartó de su (casi absoluto) silencio. En las páginas económicas del *New York Times*, el corresponsal para asuntos económicos, Louis Uchitelle, informó de que la fecha fijada para firmar el AMI se había retrasado seis meses debido a la presión popular. Por regla general, los tratados sobre comercio e inversiones «merecen poca atención del público» (¿por qué?); y si bien «no están excluidos la mano de obra ni el medio ambiente», explicaba el director de comercio internacional de la Asociación Nacional de Manufactureros, «no ocupan un lugar central» en las preocupaciones de los diplomáticos encargados de negocios ni en las de la Organización Mundial del Comercio. Pero «estos intrusos están clamando para conseguir que se oiga su opinión en las negociaciones de un tratado que va a llamarse Acuerdo Multilateral sobre Inversiones», comentaba Uchitelle (con pretendida ironía, presumo yo), y el clamor fue suficiente para imponer la dilación.

La administración Clinton, al «reconocer la presión», se esforzó por presentar el asunto a la luz adecuada. Su representante en las negociaciones del AMI dijo: «Hay un fuerte apoyo a favor de las cláusulas del tratado que harían avanzar los objetivos ecológicos del país y nuestro programa sobre normativa internacional del trabajo». De manera que los clamores de los intrusos estén empujando para abrir una puerta que está abierta: Washington ha sido el más apasionado abogado de su causa y deben sentirse reconfortados al descubrirlo. El *Washington Post* también informó de la dilación, en la sección económica, acusando fundamentalmente a la «intelectualidad francesa» que «hizo suya la idea» de que las normas del AMI «planteaban una amenaza para la cultura francesa», a lo que se habían sumado también los canadienses. «Y la administración Clinton demostró poco interés por defender el acuerdo, dada sobre todo la ferviente oposición de muchos de los propios grupos ecologistas y obreros norteamericanos que lucharon contra [el TLC]», y que como sea no han logrado comprender que su batalla está mal

orientada, puesto que la administración Clinton ha insistido en todo momento en los «objetivos ecológicos» y en la «normativa internacional del trabajo»; lo cual no es una falseclad flagrante, puesto que los objetivos y las normas quedan en una conveniente vaguedad.(3)

Decir que los trabajadores «lucharon contra el TLC» es una forma muy especial de presentar el hecho de que el movimiento obrero reclama una versión del TLC que sirva a los intereses de los habitantes de los tres países implicados, no sólo a los de los inversores, y que sus detalladas críticas y propuestas estuvieron vetadas en los medios de información (lo mismo que similares análisis y propuestas de la Oficina de Evaluación Tecnológica del Congreso).

El *Time* informó de que no se había cumplido el plazo «a causa, en gran medida, del tipo de activismo desplegado en San José», California, refiriéndose a una manifestación de ecologistas y otros grupos. «La acusación de que el AMI destriparía la protección nacional del medio ambiente ha convertido un acuerdo técnico sobre economía en una *cause célèbre*.» Los comentarios fueron difundidos por la prensa canadiense, la única del mundo occidental que empezó a cubrir el tema en serio (bajo la intensa presión de las organizaciones populares y los activistas) clespués de tan sólo dos años de silencio. El *Toronto Globe and Mail* observaba que los estados de la OCDE «no eran dignos rivales ... de una banda mundial de organizaciones de base que, con poco más que ordenadores y acceso a Internet, colaboraron a hacer descarrilar un pacto».(4)

El mismo tema fue pregonado con un dejo de desesperanza, si es que no de terror, por el *Financial Times* de Londres, un periódico económico de primera importancia mundial. En un artículo titulado «Guerrillas en la Red», informaba de que «el miedo y la estupefacción habían hecho presa en los gobiernos de los países industrializados» cuando, «para su consternación», sus esfuerzos para imponer el AMI en secreto «habían caído en la emboscada tendida por una horda de vigilantes cuyos motivos y métodos sólo muy oscuramente se comprenden en la mayor parte de las capitales de las naciones»; lo cual es bastante natural: éstos no forman parte de los «electorados nacionales», luego ¿cómo podría esperarse que los gobiernos los comprendieran? «Esta semana, la horda se apuntó su primera victoria» al bloquear el acuerdo sobre el AMI, proseguía el periódico, «y algunos creen que esto puede alterar fundamentalmente el sistema con que se están negociando los acuerdos eco nóm icos internacionales».

Las hordas tienen un aspecto terrorífico: «incluyen a los sindicatos, los grupos de presión ecologistas y defensores de los derechos humanos y los grupos que se oponen a la globalización»; se trata de la globalización en la concreta forma que la exigen los «electorados nacionales». La horda alborotadora arrolló las indefensas estructuras de poder de las ricas sociedades industriales. Está encabezada por unos «movimientos marginales que abrazan actitudes extremistas» y tienen «buena organización y abundantes fondos», lo que les permite «ejercer mucha influencia en los medios de comunicación y en los miembros de los parlamentos nacionales». En Estados Unidos, la «mucha influencia» en los medios fue en realidad cero, y en Gran Bretaña, donde apenas hay diferencias, alcanzó tales alturas que el ministro de Interior del gobierno laborista, Jack Straw, admitió en la BBC que nunca había oído hablar del AMI. Pero ha de entenderse que incluso la menor brecha en el conformismo constituye un terrible peligro.

El periódico proseguía recomendando que sería necesario «solicitar el apoyo del mundo de las finanzas» para hacer retroceder las hordas. Hasta ahora, el mundo de las finanzas no ha reconocido la gravedad de la amenaza. Que en verdad es grave. Los «encargados de negocios con experiencia» advierten que, «con las crecientes exigencias de mayor transparencia y responsabilidad pública», se está poniendo «más difícil para los negociadores hacer los pactos a puerta cerrada y pasarlos a los parlamentos para que les estampen el sello». «En lugar de esto, se enfrentan a presiones para que consigan una mayor legitimidad popular de sus acciones mediante su exposición y defensa en público», tarea nada fácil cuando las hordas se interesan por la «seguridad económica y social» y cuando el impacto de los acuerdos comerciales «en la vida de la gente normal ... corre el riesgo de provocar resentimiento popular» y «sensibilización sobre cuestiones como las ambientales y la salubridad de los alimentos». Incluso podría resultar imposible «resistirse a las demandas de participación directa de los grupos de presión en las decisiones de la OMC, lo que violaría uno de los principios fundamentales del organismo». «Este es el lugar donde los gobiernos conspiran en privado contra los grupos de presión nacionales», dice un antiguo alto cargo de la OMC. Si se abre brecha en las murallas, la OMC y similares organizaciones secretas de los ricos y poclerosos podrían convertirse en «un feliz coto de caza para los intereses particulares»: los de los obreros, los de los campesinos, los cfe las personas que se preocupan por la seguridad económica y social, por la salubridad de los alimentos y por el destino de las generaciones futuras, más los de otros elementos extremistas marginales que no entienden que los recursos se utilizan con eficacia cuando favorecen los intereses a corto plazo del poder privado, al amparo de los gobiernos que «conspiran en privado» para proteger y ampliar sus poderes.(5)

Es superfluo añadir que los intereses y los grupos de presión que estén provocando tal temor y consternación no son el U. S. Council tar International Business ni los «abogados y hombres de negocios» que están «escribiendo las normas del orden global», ni nada parecido, sino la «voz del pueblo» que «invariablemente falta».

La «conspiración en privado» va mucho más allá de los acuerdos comerciales, por supuesto. La responsabilidad que recae sobre el público de asumir costes y riesgos es, o debería ser, bien conocida por los observadores de lo que sus acólitos gustan de llamar la «economía capitalista de libre empresa». En el mismo artículo, Uchitelle informa de que Caterpillar, que hace poco se apoyó en su capacidad productiva en el extranjero para romper una huelga importante, ha trasladado el 25 por 100 de la producción al extranjero y se propone, para el año 2010, aumentar en un 50 por 100 las ventas procedentes del extranjero, con ayuda de los contribuyentes norteamericanos. «El ExportImport Bank desempeña un papel importante en la estrategia [de Caterpillar]», con sus «créditos a bajo interés» que facilitan la operación. Los créditos del ExIm ya concedidos se acercan al 2 por 100 de los 19.000 millones de dólares que tiene Caterpillar de ingresos anuales y se elevarán para los nuevos planes proyectados en China. Este es el procedimiento con el que se opera habitualmente: las empresas multinacionales cuentan de un modo muy peculiar con el estado de origen para obtener ciertos servicios cruciales.(6) «En los mercados verdaderamente duros, con grandes riesgos y grandes oportunidades», explica un ejecutivo de Caterpillar, «es necesario contar con alguien en la retaguardia», y los gobiernos – en especial los poderosos – «siempre tendrán mayor influencia» que los bancos y mejor disposición para ofrecer préstamos a bajo interés, gracias a la generosidad del inadvertido contribuyente.

La dirección ha de permanecer en Estados Unidos, de modo que las personas que cuentan estarán cerca del protector que hay en la retaguardia y disfrutarán del debido estilo de vida, en un paisaje no menos digno: las chabolas de la mano de obra extranjera no les arruinarán el panorama. Aparte de los beneficios, la operación proporciona un arma muy útil contra los trabajadores que se atreven a levantar la cabeza (como ejemplifica la reciente huelga), lo que pagarán con la pérdida de sus puestos de trabajo y costeando las mejoradas armas de la guerra de clases. Lo que es más, todo esto mejora la salud de la «economía de cuento de hadas», que se basa en la «mayor inseguridad de los trabajadores», como explican los especialistas.

En el conflicto acerca del AMI, no cabe mayor rigor en el trazado de los alineamientos. Por un lado están las democracias industriales y sus «electorados nacionales». Por otro, las «hordas de vigilantes», los «intereses particulares» y los «extremistas marginales», que reclaman transparencia y control público, y se muestran descontentos cuando los parlamentos se limitan a estampar el sello sobre los tratos cerrados en secreto por la conjunción del poder privado y el estatal. Las hordas estaban plantando cara a la mayor concentración de poder del mundo, y podría sostenerse que de la historia universal: los estados de los países ricos y poderosos, las instituciones financieras internacionales y los sectores financieros y empresariales agrupados, además de las grandes corporaciones de los medios de comunicación. Los elementos populares ganaron, pese a lo minúsculo de los recursos y la pequeñez de la organización, tan limitados que sólo la paranoia de quienes demandan el poder absoluto podía percibir el resultado en los términos que acabamos de exponer. Se trata de un logro fuera de lo común.

No fue esta la única victoria en aquellos mismos meses. Se consiguió otra en el otoño de 1997, cuando se obligó a la administración a retirar la propuesta legislativa de la Vía Rápida. Recuérdese que lo que estaba en cuestión no era la «libertad de comercio», como suele afirmarse, sino la democracia: la «mayor transparencia y control de responsabilidades» que exigen las hordas. La administración Clinton había argumentado, correctamente, que no pedía nada nuevo: exactamente la misma autoridad de que habían disfrutado sus antecesoras para concertar «pactos a puerta cerrada» que luego pasaban por el trámite parlamentario de «estampar el sello». Pero los tiempos cambian. Como reconocía la prensa económica cuando la opinión desafió la Vía Rápida, los contrarías al antiguo régimen tenían un «arma decisiva», la mayor parte de la población, que ya no estaba satisfecha con hacer el papel de espectador mientras los «buenos» hacen la parte importante de la faena. Los lamentos de la prensa económica repiten los de los internacionalistas liberales de la Comisión Trilateral hace veinticinco años, que se quejaban del empeño de los «intereses particulares» por organizarse y entrar en la arena política. Sus plebeyas payasadas perturbaban los arreglos civilizados que habían prevalecido antes de que estallara la «crisis de la democracia», cuando «Truman había podido gobernar el país con la cooperación de un número relativamente pequeño de banqueros y abogados de Wall Street», según explicaba el harvardiano Samuel H. Huntington, que pronto sería catedrático de la ciencia de gobernar. Y ahora se están colando en recintos aún más sagrados.

Estas tendencias son importantes. Los poderes de la OCDE y sus electorados nacionales no van a aceptar la derrota,

por supuesto. Pondrán en juego relaciones públicas más eficaces para explicar a las hordas que harían mejor en dedicarse a sus objetivos particulares mientras los negocios del mundo se conciertan en secreto, y buscarán la forma para poner en pie el AMI, dentro de la OCDE o en otro marco.(7) Ya se están haciendo esfuerzos para modificar la carta del FMI y condicionar los créditos a disposiciones del estilo de las del AMI, para a continuación exigir el cumplimiento de las normas a los débiles, en último término a los otros. Los verdaderamente poderosos se atenderán a sus propias normas, como cuando la administración Clinton interrumpió sus apasionadas peticiones de libre comercio para plantificar tarifas prohibitivas a los superordenadores japoneses que estaban compitiendo con los fabricantes norteamericanos (llamados «privados», pese a su inmensa dependencia de la protección y las subvenciones públicas).(8)

Aunque es seguro que el poder y los privilegios no cesarán, las victorias populares han de ser no obstante alentadoras. Enseñan lecciones sobre lo que puede conseguirse incluso cuando las fuerzas enfrentadas están tan crasamente desequilibradas como en el enfrentamiento sobre el AMI. Ciertamente estas victorias son defensivas. Impiden, o por lo menos retrasan, los pasos para socavar aún más la democracia y para transferir aún más poder a manos de las tiranías privadas, que van rápidamente concentrándose y persiguen administrar los mercados y constituir un «senado virtual», capaz por muchos sistemas de bloquear el empeño popular por poner los procedimientos democráticos al servicio del interés público: mediante la amenaza de las fugas de capitales, mediante los traslados de la producción, mediante el control de los medios de comunicación y por otros sistemas. Hay que prestar suma atención al temor y la desesperación de los poderosos. Ellos entienden muy bien el alcance potencial del «arma decisiva» y sólo esperan que quienes persiguen un mundo más libre y más justo no alcancen la misma comprensión y le den un uso eficaz.